



Roj: **STSJ AS 129/2017 - ECLI: ES:TSJAS:2017:129**

Id Cendoj: **33044330012017100054**

Órgano: **Tribunal Superior de Justicia. Sala de lo Contencioso**

Sede: **Oviedo**

Sección: **1**

Fecha: **20/02/2017**

Nº de Recurso: **290/2015**

Nº de Resolución: **134/2017**

Procedimiento: **CONTENCIOSO**

Ponente: **MARIA OLGA GONZALEZ-LAMUÑO ROMAY**

Tipo de Resolución: **Sentencia**

T.S.J.ASTURIAS CON/AD (SEC.UNICA)

OVIEDO

SENTENCIA: 00134/2017

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE ASTURIAS

Sala de lo Contencioso-Administrativo

RECURSO: PO 290/15

RECURRENTE: EXPLORACIONES MINERAS DEL CANTABRICO, S.L.

PROCURADOR: D. EUGENIO ALONSO AYLLON

RECURRIDO: CONSEJERIA DE ECONOMIA Y EMPLEO

REPRESENTANTE: LETRADO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

CODEMANDADOS: ASOCIACION PLATAFORMA ORO NO, AYUNTAMIENTO DE EL FRANCO, AYUNTAMIENTO DE CASTROPOL, AYUNTAMIENTO DE TAPIA DE CASARIEGO

PROCURADORES: D^a GABRIELA CIFUENTES JUESAS, D. ANTONIO SASTRE QUIROS

SENTENCIA

Ilmos. Sres.:

Presidente:

D. Luis QuerolCarceller

Magistrados:

D. Julio Luis Gallego Otero

D^a Olga González Lamuña Romay

En Oviedo, a veinte de febrero de dos mil diecisiete.

La Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia del Principado de Asturias, compuesta por los Ilmos. Sres. Magistrados reseñados al margen, ha pronunciado la siguiente sentencia en el recurso contencioso administrativo número 290/15 interpuesto por la entidad Exploraciones Mineras del Cantábrico, S.L., representada por el Procurador D. Eugenio Alonso Ayllón, actuando bajo la dirección Letrada de D. Ignacio García Matos, contra la Consejería de Economía y Empleo, representada por el Letrado del Principado de Asturias, siendo partes codemandadas la Asociación Plataforma ORO NO, representada por la Procuradora D^a Gabriela Cifuentes Juesas, actuando bajo la dirección Letrada de D. Víctor Álvarez Bayón; el Ayuntamiento de El Franco, representado por el Procurador D. Antonio Sastre Quirós, actuando bajo la

dirección Letrada de D. Javier Seoane Núñez; y los Ayuntamientos de Castropol y Tapia de Casariego, no personados. Siendo Ponente la Ilma. Sra. Magistrado D^a Olga González Lamuño Romay.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- Interpuesto el presente recurso, recibido el expediente administrativo se confirió traslado al recurrente para que formalizase la demanda, lo que efectuó en legal forma, en el que hizo una relación de Hechos, que en lo sustancial se dan por reproducidos. Expuso en Derecho lo que estimó pertinente y terminó suplicando que, en su día se dicte sentencia en la que estimando el recurso interpuesto, revoque la resolución recurrida por no estar ajustada a derecho, con imposición de costas a la parte contraria. A medio de otrosí, solicitó el recibimiento del recurso a prueba.

SEGUNDO.- Conferido traslado a la parte demandada para que contestase la demanda, lo hizo en tiempo y forma, alegando: Se niegan los hechos de la demanda, en cuanto se opondan, contradigan o no coincidan con lo que resulta del expediente administrativo. Expuso en Derecho lo que estimó pertinente y terminó suplicando que previos los trámites legales se dicte en su día sentencia, por la que desestimando el recurso se confirme el acto administrativo recurrido, con imposición de costas a la parte recurrente.

TERCERO.- Conferido traslado a las partes codemandadas para que contestasen a la demanda lo hicieron en tiempo y forma la Asociación Plataforma Oro No y el Ayuntamiento de El Franco, solicitando se dicte sentencia con desestimación del recurso, confirmando la resolución recurrida, con imposición de costas al actor, no así los Ayuntamientos de Castropol y Tapia de Casariego a quienes les caducó el trámite.

CUARTO.- Por Auto de 15 de abril de 2016, se recibió el procedimiento a prueba, habiéndose practicado las propuestas por las partes y admitidas, con el resultado que obra en autos.

QUINTO.- No estimándose necesaria la celebración de vista pública, se acordó requerir a las partes para que formularsen sus conclusiones, lo que hicieron en tiempo y forma.

SEXTO.- Se señaló para la votación y fallo del presente el día 16 de febrero pasado en que la misma tuvo lugar, habiéndose cumplido todos los trámites prescritos en la ley.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO. - Se impugna por la recurrente EXPLORACIONES MINERAS DEL CANTABRICO, S.L., en el presente recurso contencioso administrativo la Resolución de fecha 10 de febrero de 2015, de la Consejería de Economía y Empleo del Gobierno del Principado de Asturias, por la que se acuerda no aprobar el Proyecto Minero de explotación por interior del yacimiento de "Salave", en Salave, concejo de Tapia de Casariego, presentado por la recurrente, al haberse formulado Declaración de Impacto Ambiental (Resolución de 26 de diciembre de 2014, de la Consejería de Fomento, Ordenación del Territorio y Medio Ambiente (BOPA nº 4 del miércoles 7 de enero de 2015), con sentido desfavorable. Con la demanda presentada se solicita se dicte Sentencia por la que:

a) Anule, revoque y deje en todo caso sin efecto alguno la Resolución de la Consejería de Fomento, Ordenación del Territorio y Medio Ambiente, de fecha 26 de diciembre de 2014, así como la Resolución de la Consejería de Economía y Empleo de fecha 10 de febrero de 2015, por la que se acuerda no aprobar el proyecto minero de explotación por interior del yacimiento de Salave.

b) Reconozca el derecho a ser indemnizado por la Administración demandada en la cantidad de 8.594.071,46 €, más los intereses de demora de dicha cantidad hasta el momento de su completo pago, pretensiones estas a las que se opone la Administración demandada, Principado de Asturias, representada por el Letrado de sus Servicios Jurídicos y la Plataforma ORO NO.

La resolución impugnada no aprueba el Proyecto Minero al haberse formulado Declaración de Impacto Ambiental de la Consejería de Fomento, Ordenación del Territorio y Medio Ambiente con sentido desfavorable a la vista de los informes de la Confederación Hidrográfica del Cantábrico, de los que resulta que no se han evaluado adecuadamente los impactos medioambientales sobre las aguas superficiales y subterráneas, que el proyecto causará previsiblemente efectos negativos significativos sobre el medio ambiente, y que las medidas previstas por el promotor no son garantía suficiente de su completa corrección o adecuada compensación.

Se alega por la recurrente como fundamento de su pretensión impugnatoria que la denegación del proyecto con base exclusiva en la Declaración de Impacto Ambiental resulta contrario a derecho, toda vez que la motivación repleta de conceptos indeterminados adolece de una falta absoluta de precisión, y en la medida que la resolución de la Administración minera supone una restricción al ejercicio de un derecho individual,

como es el derecho subjetivo de explotación que ostenta la actora como titular de las concesiones mineras que sustentan el proyecto, aquélla debe de estar motivada por imperativo del art. 39 bis, en relación con el artículo 54.1.a) y f) de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y art. 62 de la Ley de Minas, siendo la decisión del órgano sustantivo de carácter estrictamente reglado habida cuenta del derecho al aprovechamiento de los recursos de la Sección c), en virtud del citado art. 62.2, por lo que la misma solo puede ser denegatoria en caso de que se pongan de manifiesto y se expresen en la resolución la infracción de concretos preceptos legales o reglamentarios.

Señala en segundo lugar, que la resolución del órgano sustantivo es contraria a derecho por dejar sin resolver la solicitud del Plan de Restauración formulada por la actora, que la Declaración de Impacto Ambiental emitida infringe por completo el régimen legal que le resulta de aplicación, así como la jurisprudencia del Tribunal Supremo y doctrina del Tribunal Constitucional que lo interpreta, señalándose igualmente que la Confederación Hidrográfica del Cantábrico (CHC) ha rechazado el proyecto con descalificaciones genéricas e imputaciones de incumplimientos de preceptos legales sin concretar, no habiendo analizado en el expediente el Informe del IGME, acompañando informe pericial en el que analizan todos y cada uno de los aspectos que abordan dichos informes desde la perspectiva técnica, y que vienen a demostrar la falta de rigor técnico de todos y cada uno de ellos, para terminar solicitando la indemnización de daños y perjuicios en reconocimiento de una situación jurídica individualizada, siendo ésta una pretensión accesorio y subordinada a la de anulación del acto, teniendo en cuenta que la indemnización de daños y perjuicios puede suponer la única medida para lograr el pleno restablecimiento de la situación jurídica perturbada por el acto administrativo contrario al ordenamiento jurídico, dándose el supuesto para que opere la responsabilidad patrimonial de la Administración.

SEGUNDO .- Por la aquí recurrente, sociedad Exploraciones Mineras del Cantábrico, S.L., se presentó el día 1 de julio de 2011 solicitud de aprobación del Proyecto Minero de explotación por interior del yacimiento de "Salave", en Salave, concejo de Tapia de Casariego, siguiendo el trámite previsto en el texto refundido de la Ley de Evaluación de Impacto Ambiental de Proyectos aprobado por RDL 1/2008, de 11 de enero, mediante Resolución de 23 de marzo de 2012, de la Consejería de Fomento, Ordenación del Territorio y Medio Ambiente, se establecía el contenido del estudio de impacto ambiental (EIA), presentándose por la actora el 17 de mayo de 2012 el EIA junto con el resto de la Documentación Técnica prevista en la normativa de aplicación. Mediante la publicación en el Boletín Oficial del Principado de Asturias (BOPA) nº 126 de 1 de junio de 2012, se procedió a someter a Información pública el Estudio de Impacto Ambiental y Proyecto Minero de explotación por interior del yacimiento de "Salave", seguido el trámite ambiental, con fecha 20 de diciembre de 2012, por la Consejería de Fomento, Ordenación del Territorio y Medio Ambiente como órgano ambiental, se formula la Declaración de Impacto Ambiental (DIA), publicada en el BOPA de 17 de enero de 2013, la referida DIA fue expresamente favorable respecto de determinadas instalaciones (mina subterránea, pozas de ventilación, galería de acceso, escombrera ubicada al este del emboquille de la galería de acceso, planta de machaqueo en el interior de la mina, zona de acopios exterior, instalaciones auxiliares, pistas, accesos, línea eléctrica de 20 kv, planta de hormigón, plantas de tratamiento de aguas, edificios e instalaciones auxiliares en el entorno del emboquille de la galería de acceso, etc...), pero que y, en base al informe de la Confederación Hidrográfica del Cantábrico (CHC) de 3 de julio de 2012, fue desfavorable respecto de la Planta de tratamiento de mineral y al Depósito de lodos estériles.

Por la Consejería, y a la vista del escrito presentado por la actora, se consideró que se podrá proceder a mejorar el EIA haciéndolo en los aspectos mencionados por el informe de la CHC, presentando el 18 de diciembre "Estudio de Impacto Ambiental" ampliado al informe de la Confederación Hidrográfica del Cantábrico de 3 de julio de 2012, que se sometió a información pública, en donde se introducen mejoras ambientales.

A la vista de las alegaciones presentadas e informes y observaciones realizadas durante la información pública, incluido informe de la CHC de 31 de enero de 2014, con fecha 22 de abril de 2014, se remite el expediente al órgano ambiental para que formule el correspondiente DIA, aportándose por la recurrente, con fecha 11 de julio de 2014, informe en respuesta al de la CHC, paralelamente a ello la Dirección General de Minería y Energía evacua informe sobre la posible afección al medio híbrido de la mencionada explotación minera por el Instituto Geológico y Minero de España (IGME), en el que se concluía que la implantación de la industria extractiva se plantea como perfectamente compatible con los cauces (Orjales, Murias, Anguileiro) y las aguas subterráneas (acuíferos superior e inferior) y con el mantenimiento y mejora ambiental de las Lagunas de Silva.

En fecha 9 de agosto de 2004, se publica en el BOPA el anuncio de información relevante a efectos de la decisión de adopción sobre la ejecución del proyecto minero de explotación por interior del yacimiento de "Salave", concejo de Tapia de Casariego, relativo a la valoración de alternativas a la ubicación de instalaciones mineras, emitiéndose por la CHC en fecha 12 de septiembre de 2014, informe en el que se contesta que siguen siendo válidas en relación con el Proyecto, Estudio e Impacto Ambiental y Plan de Restauración fechadas en

mayo de 2012 y el informe de la Confederación Hidrográfica de fecha 3 de julio de 2012, en relación con el Estudio de Impacto Ambiental fechado en diciembre de 2013, el informe del Organismo de cuenca de 31 de enero de 2014, por lo que ningún motivo existe para modificar, ampliar o completar el contenido de las mismas.

Por su parte, la recurrente presenta escrito el 6 de octubre de 2014, solicitándose por la Consejería con fecha 4 de noviembre la continuación del desenvolvimiento del expediente y que por parte del órgano ambiental, previos los trámites oportunos, se formulase la Declaración de Impacto Ambiental (DIA). Previa reunión de 19 de diciembre de 2014 de la Comisión de Asuntos Medioambientales (CAMA) y con informe emitido por unanimidad, se formula, a los solos efectos ambientales, la Declaración de Impacto Ambiental con sentido desfavorable a la vista de los informes de la Confederación Hidrográfica del Cantábrico que obran en el expediente, de los que resulta que no se han evaluado adecuadamente los impactos ambientales sobre las aguas superficiales y subterráneas, que el proyecto causará previsiblemente efectos negativos significativos sobre el medio ambiente y que las medidas previstas por el promotor no son garantía suficiente de su completa corrección o adecuada compensación, siendo publicado en el BOPA de 7 de enero de 2015, dictando resolución no aprobando el Proyecto Minero de Explotación citado.

TERCERO.- Planteados en tales términos la presente controversia jurisdiccional señalar que, en relación al motivo de oposición consistente en la afirmación que la denegación del proyecto en base exclusiva a la Declaración de Impacto Ambiental resulta contrario a derecho, toda vez que la motivación repleta de conceptos indeterminados adolece de una falta absoluta de precisión y en la medida que la resolución de la Administración minera supone una restricción al ejercicio de un derecho individual, como es el derecho subjetivo de explotación que ostenta la actora como titular de las concesiones mineras que sustentan el proyecto, debe de estar motivada, de conformidad con lo previsto en el art. 39 bis en relación con el artículo 54.1.a) y f) de la Ley 30/92 , y 62 de la Ley de Minas , siendo la decisión del órgano sustantivo de carácter estrictamente reglado habida cuenta del derecho al aprovechamiento de los recursos de la Sección c), en virtud del citado art. 62.2, por lo que la misma solo puede ser denegatoria en caso de que se pongan de manifiesto y se expresen en la resolución, la infracción de concretos preceptos legales o reglamentarios no puede admitirse; la denegación tiene una causa o motivación clara como son los informes desfavorables emitidos por la Confederación Hidrográfica del Cantábrico aportados al expediente administrativo, de los cuales resulta que no fueron adecuadamente evaluados los impactos ambientales sobre las aguas superficiales y subterráneas, que el proyecto causará previsiblemente efectos negativos significativos sobre el medio ambiente, y que las medidas previstas por el promotor no son garantía suficiente de su completa corrección o adecuada compensación, así las numerosas deficiencias del proyecto y de su evaluación, las contradicciones internas en que los documentos elaborados por el promotor incurren, la deficiente aplicación del parámetro de superficie ocupada como criterio de evaluación al asignarse puntuaciones superiores a alternativas con mayor superficie, y también del parámetro "ecosistemas aguas abajo" la insuficiencia de los sistemas de tratamiento, la indeterminación en los puntos de vertido; la presencia de concentraciones de agentes contaminantes sumamente superiores a las normas de calidad ambiental, expresadas con precisión matemática por la CHC; la aportación de resultados radicalmente distintos en los documentos presentados por el promotor sobre este particular, las insuficiencias en materia de caracterización de vertidos y valores finales de vertido, la omisión del estudio en materia de contaminación de aguas superficiales y subterráneas en el trámite de información pública; las insuficiencias y contradicciones en la etapa post-clausura; la larga duración de la contaminación en la etapa post-clausura que supera, en todo caso, las previsiones de duración de dicha fase realizadas en el estudio de impacto ambiental modificado en 2013, y la superior y exclusiva competencia de la Confederación en materia de cumplimiento de parámetros de vertido.

Así, el informe de la Confederación Hidrográfica del Cantábrico de fecha 3 de julio de 2012, que fundamenta la no aprobación de la DIA deja claramente establecido que el EIA sometido a consultas es insuficiente en relación a las alternativas, en especial, impactos sobre el dominio público hidráulico, la calidad de las aguas continentales y sus ecosistemas asociados (incumplimiento de la Directiva Marco del Agua - Directiva 2000/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2000). Presentando el EIA graves deficiencias en cuanto al análisis de determinadas afecciones, aguas residuales y viabilidad técnica de las instalaciones de depuración.

Por su parte, el informe de la Confederación Hidrográfica del Cantábrico de fecha 31 de enero de 2014, pone de manifiesto graves defectos insubsanables como son la omisión de una fase post-clausura en la que se seguirán produciendo impactos negativos sobre la calidad de las aguas superficiales y subterráneas, incumpléndose de este modo varias de las disposiciones del Real Decreto 975/2009, los caudales serán superiores a los propuestos, por tanto, el sistema de depuración propuesto no permite garantizar el cumplimiento de la normativa vigente en materia de aguas, ni los objetivos establecidos por la Planificación Hidrográfica, igualmente el informe aportado del IGME, reconoce que los niveles de arsénico son notablemente

altos y que los parámetros de vertido previsto deberán cumplir lo establecido por el organismo competente a fin de preservar la calidad natural de los cursos de aguas superficiales.

Por último, en el informe emitido por la Confederación Hidrográfica del Cantábrico de fecha 12 de septiembre de 2014, se concluye considerando las observaciones del informe, la circunstancia que los documentos presentados no constituyen modificación del proyecto ni del EIA, por lo que resultan plenamente vigentes y aplicables las consideraciones realizadas en los informes precedentes.

Tales informes dieron lugar a que se dictase el DIA desfavorable, previo informe del Servicio de Prevención Ambiental y Cambio Climático de la Dirección General de Calidad Ambiental y de la Comisión para Asuntos Medioambientales del Principado de Asturias y la resolución denegatoria, por lo que a la vista de los mencionados informes, y de la extensa motivación que en los mismos se contiene, plenamente asumidos por los órganos sectoriales de la Administración autonómica, y con el valor probatorio que le confiere la reiterada jurisprudencia, teniendo la posición de garante y responsable del dominio público hidráulico, no al órgano sustantivo ni al IGME, el cual como conclusión de su informe se remite a lo que disponga la Confederación, sin que a ello pueda oponerse el informe de parte presentado en vía administrativa y ya valorado, debiendo tenerse en cuenta además la mayor credibilidad de los técnicos más alejados de los intereses de las partes, toda vez que los dictámenes formulados por encargo de la recurrente, adolecen de un subjetivismo sumamente interesado en la defensa de sus propias pretensiones, frente a la objetividad e imparcialidad que se presume a los técnicos de la Administración, unido a la condición de auténticos expertos en la materia de esta forma resulta de aplicación lo dispuesto en el art. 89.5 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, que establece que la aceptación de informes o dictámenes servirá de motivación a la resolución cuando se incorpore al texto de la misma, de esta forma los informes del Servicio de Prevención Ambiental y Cambio Climático de la Dirección General de Calidad Ambiental y de la Comisión para Asuntos Medio Ambientales del Principado de Asturias asumen el contenido de los informes de la Confederación; y con el valor probatorio que les confiere la jurisprudencia del Tribunal Supremo, lo que justifican sin margen de discrecionalidad tanto el sentido desfavorable de la DIA como la Resolución denegatoria de aprobación, art. 55.4 y 5 del TROTU, que establece:

4.- El procedimiento de Evaluación de Impacto se resolverá con carácter previo a la resolución del procedimiento aplicable a la autorización de la actividad, plan o programa que haya de someterse a evaluación. Recibidos los informes sobre los diversos impactos evaluados, los organismos competentes emitirán a su vez informe o declaración sobre el impacto de la actividad evaluada. El informe o declaración negativa por los organismos competentes determinará la imposibilidad de conceder la correspondiente autorización o licencia urbanística o de actividad.

5.- Si el organismo o entidad promotora del programa o actuación evaluados hiciese constar su disconformidad con la citada evaluación, el titular de la Consejería competente en materia de urbanismos y ordenación del territorio elevará el expediente al Consejo de Gobierno para que sea éste quien decida sobre la procedencia de llevar a cabo la actividad.

Es por ello que si bien el apartado 5 establece la posibilidad que el órgano sustantivo eleve su disconformidad al Consejo de Gobierno, la Resolución denegatoria emitida por el órgano sustantivo no ha elevado disconformidad alguna al Consejo de Gobierno, sino que ha denegado la autorización, con fundamentación en los reseñados anteriormente informes de la Confederación en el DIA.

CUARTO .- En relación a la sujeción de la planta de tratamiento a Autorización Ambiental Integrado, señalar que el informe del Servicio de Gestión Ambiental incorporado a la resolución que fijó el contenido del EIA o Documento de Referencia, señala que al proyecto le resulta de aplicación la Ley 16/2002, de 1 de julio, de Prevención y Control Integrado de la Contaminación, debiendo obtener la preceptiva autorización ambiental integrada que podrá tramitarse conjuntamente con el procedimiento de evaluación de impacto ambiental; siendo así que la planta de tratamiento del mineral y los depósitos de residuos están sujetos a la Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control integrados de la contaminación y por tanto a Autorización Ambiental Integrada, siendo vinculantes los informes de la Confederación Hidrográfica de acuerdo con el art. 19 de la Ley.

QUINTO.- Por último, señalar que la denegación de la autorización del Plan de Explotación implica la desestimación de la autorización del Plan de Restauración, al carecer éste de objeto y ser de tramitación conjunta y simultánea, de conformidad con lo previsto en el RD 975/2009, sin que pueda admitirse con ello, como pretende la actora, que la resolución del órgano sustantivo resulta contrario a derecho al dejar sin resolver la solicitud del Plan de Restauración por ella formulado, toda vez que carece de sentido autorizar la realización de un Plan de Restauración cuando ha sido denegada la autorización del Plan de Explotación, teniendo una función subordinada a este último.

SEXTO.- En fase de conclusiones alega la actora la infracción de las normas reguladoras de la formación de la voluntad de los órganos colegiados, y aun cuando debe señalarse que no cabe alegar en conclusiones cuestiones que no hubieran sido alegadas en la demanda, señalar que si bien el art. 24 de la LRJAP -PAC establece que corresponde a los miembros de los órganos colegiados a) Recibir, con una antelación mínima de cuarenta y ocho horas la convocatoria conteniendo el orden del día de las reuniones. Se informará sobre los temas que figuren en el orden del día y estará a disposición de los miembros en igual plazo, tales requisitos sí se cumplieron en la Resolución de la Comisión de Asuntos de Medio Ambiente de 19 de diciembre de 2014, al haberse remitido y recibida la convocatoria con una antelación mínima de cuarenta y ocho horas, estando a disposición de los miembros la información en la sede del órgano, y sin que la inexistencia del Director General de Minería y Energía y de los miembros que delegaron su voto en la Presidenta, constituya una irregularidad que vicie la misma, conforme establece el art. 26 de la mencionada Ley, razones todas ellas que llevan a la desestimación de tal causa de nulidad.

Es por ello que la desestimación del recurso interpuesto conlleva a que no resulte necesario examinar la presunta responsabilidad patrimonial de la Administración, desde el momento que solo cabe la misma con el presupuesto que la denegación de la autorización fuese contraria a derecho, siendo así que conforme a lo dispuesto en el art. 141 de la Ley 26/1992 de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común solo serán indemnizables las lesiones producidas al particular provenientes de daños que éste no tenga el deber jurídico de soportar de acuerdo con la Ley, razones todas ellas que llevan a la desestimación del recurso interpuesto.

SEPTIMO. - En materia de costas procesales las mismas deben ser impuestas a la parte recurrente al ser desestimadas sus pretensiones y no concurrir motivos o circunstancias para su no imposición, de conformidad con lo establecido en el art. 139 de la Ley 29/1998 reguladora de esta Jurisdicción, con el límite de 1000 euros por todos los conceptos y para las partes que contestaron a la demanda.

Vistos los preceptos legales citados y demás de pertinente aplicación,

FALLO

En atención a todo lo expuesto, la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Asturias, ha decidido: Desestimar el recurso contencioso administrativo interpuesto por el Procurador D. Eugenio Alonso Ayllón, en nombre y representación de la entidad EXPLORACIONES MINERAS DEL CANTABRICO, S.L., contra la Resolución de fecha 10 de febrero de 2015, de la Consejería de Economía y Empleo del Gobierno del Principado de Asturias, por la que se acuerda no aprobar el Proyecto Minero de Explotación por interior del yacimiento minero de "Salave", en Salave, concejo de Tapia de Casariego, estando representada la Administración demandada, Principado de Asturias, por el Letrado de sus Servicios Jurídicos, actuando como codemandada la Asociación Plataforma ORO NO, representada por la Procuradora D^a Gabriela Cifuentes Juesas y el Ayuntamiento de El Franco, representado por el Procurador D. Antonio Sastre Quirós, resolución que se confirma por ser ajustada a Derecho, con expresa imposición de costas a la parte recurrente, con el límite fijado en el último fundamento de derecho.

Contra la presente resolución cabe interponer ante esta Sala, RECURSO DE CASACION en el término de TREINTA DIAS, para ser resuelto por la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo si se denuncia la infracción de legislación estatal o por esta Sala de lo Contencioso Administrativo de este TSJ si lo es por legislación autonómica.

Así por esta nuestra Sentencia, de la que se llevará testimonio a los autos, la pronunciamos, mandamos y firmamos.